

México, D.F.

MAYO-AGOSTO DE 2008

# Historias

# 70

REVISTA DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

## ÍNDICE

### ENTRADA LIBRE

Benjamin Hufbauer

3

Paul Strand

6

Marshall Sahlins

19

### ENSAYOS

Ramsés Hernández y Margarita Loera

*El templo cristiano y su conexión con el Tlalocan mesoamericano*

23

Eduardo Flores Clair

*Acuñación y contrabando de oro en Nueva España (1777-1822)*

39

Jean Meyer

*La Iglesia católica en México, 1929-1965*

55

### AMÉRICA

Jeffrey G. Snyder

*Las compañías británicas free-standing y la fiebre del oro en Venezuela*

85

### ANDAMIO

Jean Meyer

*Religión y modernización en el México del siglo XX*

*(una breve y aleatoria bibliografía útil como andamio)*

99

### CARTONES Y COSAS VISTAS

103

### RESEÑAS

113

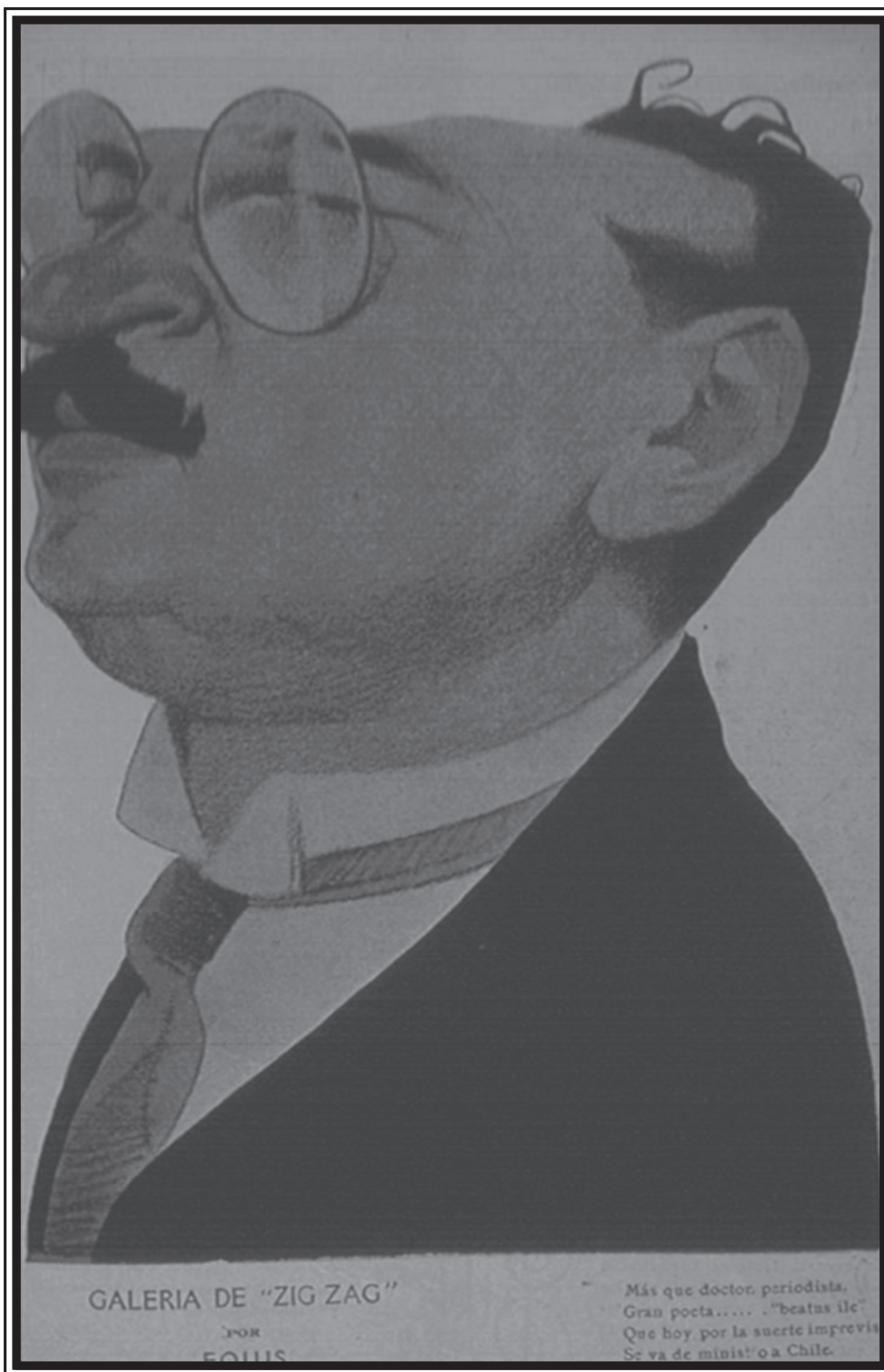
### CRESTOMANÍA

119

### ABSTRACTS

125





## Entrada Libre

### Las bibliotecas presidenciales tienen un problema histórico\*

Benjamin Hufbauer

Mientras revisaba un libro sobre bibliotecas presidenciales en la Biblioteca Franklin D. Roosevelt (FDR) en Hyde Park, Nueva York, me topé con una caricatura editorial del *Chicago Tribune* de diciembre de 1938, que cristaliza el problema de las bibliotecas presidenciales. La caricatura muestra a FDR vestido de Santa Claus mientras pone un regalo en su propio calcetín, con una carta que dice: “el Monumento de Hyde Park a Frank D. Roosevelt. Para que se engrandezca con fondos públicos y se mantenga de por vida con el gasto gubernamental. Para que sea más grande que Mount Vernon y Monticello”.

Todo lo que la caricatura decía era correcto. FDR fue pionero en la tendencia —seguida por sus sucesores— de reunir fondos privados para una biblioteca presidencial e insistir en que el gobierno federal la administrara para siempre. (Las bibliotecas presidenciales federales son distintas de las privadas y de las administradas por los estados —como la Biblioteca Lincoln en Springfield—, que se construyen mucho después de la muerte del presidente y no cuentan con recursos federales para mantenerlas). Como decía el caricaturista, la Biblioteca Roosevelt era más grande que los hogares resguardados de los presidentes anteriores, porque si bien el gran hogar de FDR también fue preservado, justo al lado había un nuevo edificio que combinaba museo, archivo y monumento.

\* Tomado del diario *The Chicago Tribune*, 3 de marzo de 2008. Traducción de Alma Parra.

*Miles de libros y artículos se han escrito usando el archivo Roosevelt, proceso que se ha repetido en otras bibliotecas presidenciales. Roosevelt creó una mina de oro para los historiadores que ha permitido a la nación aprender más de la historia.*

La caricatura se burla gentilmente del ego magnificado que caracteriza no sólo a FDR, sino a sus sucesores. La caricatura resalta la realidad de la mayoría de los ex presidentes, que quieren más un altar blanqueado que instituciones que sirvan al público y a la historia. Ese no es un asunto de partidos. Afecta a las bibliotecas de presidentes tanto demócratas como republicanos.

FDR enfrentó controversias al tratar de venderle al público, al Congreso y a los historiadores la idea de una biblioteca presidencial. Un crítico decía que FDR quería una “pirámide yankee”. Los críticos pensaban que los padres fundadores se hubieran quedado perplejos ante la idea de que un presidente iniciara la construcción de un gran monumento a sí mismo mientras se encontrara todavía en funciones. Después de todo el monumento a Washington se terminó 85 años después de su muerte. Pero finalmente FDR vendió la biblioteca presidencial —y consiguió el apoyo crucial de los investigadores— al decir que los archivos de su administración se harían inmediatamente accesibles a la consulta de los historiadores. Este fue un argumento apremiante, pues las ratas se habían comido algunos de los papeles de Washington, y algunos de los papeles de Lincoln se mantuvieron cerrados para los historiadores hasta 1947. Sin embargo, FDR quería seleccionar en secreto cuáles archivos serían abiertos a los historiadores y cuáles no. Y al darse cuenta de que no podría acabar esta tarea antes de su muerte, nombró un comité de aliados políticos para hacerlo.

Pero el plan secreto de FDR de censurar la Biblioteca Roosevelt fue revocado por un juez federal después de la muerte del ex presidente. El juez dictaminó que las afirmaciones públicas de FDR prometiendo el acceso a los archivos —en consistencia con los requerimientos de seguridad nacional— revelaban contradicciones con sus deseos privados. Y así, el sueño que FDR presentó al público, al Congreso y a los historiadores se hizo realidad. Hacia fines de la década de 1950 más de 80 por ciento de los archivos de la Biblioteca Roosevelt se abrieron a los investigadores, y en nuestros días dicha cifra es de 99 por ciento. Miles de libros y artículos se han escrito usando el archivo Roosevelt, proceso que se ha repetido en otras bibliotecas presidenciales. Roosevelt creó una mina de oro para los historiadores que ha permitido a la nación aprender más de la historia.

Aunque los archivos de las bibliotecas presidenciales estuvieron durante muchas décadas por encima de la política, porque los archivos nacionales las administraban de manera profesional, los museos de las bibliotecas presidenciales todavía eran altares acrílicos. Aunque se suponía que fueran museos históricos administrados profesionalmente por el gobierno, más frecuentemente se trataba de extensiones de campañas comer-

ciales en forma de museos, esencialmente porque los presidentes y sus partidarios controlan el contenido. Como señalaba la revista *Newsweek* en la inauguración de la Biblioteca Lyndon B. Johnson en Austin, Texas, en 1971: “dentro de la Biblioteca, el rostro de Lyndon Johnson es tan omnipresente como el del presidente Mao en Pekín”. Los museos de las bibliotecas presidenciales tienden a barrer los grandes escándalos bajo el tapete. Por ejemplo, en la Biblioteca Reagan en Simi Valley, California, no existe una exhibición que explique el asunto Irán-contras. Es verdad que la mayoría de museos se mejoran cuando los presidentes mueren y el poder de sus partidarios se desvanece poco a poco, pero este proceso normalmente lleva generaciones.

El presidente Bush está planeando la biblioteca presidencial más cara jamás construida. La Biblioteca Roosevelt costó cerca de 400 mil dólares cuando se terminó en 1941 (alrededor de ocho millones de dólares actuales). En contraste, se espera que la Biblioteca George Bush cueste más de 200 millones de dólares, dinero que puede provenir de individuos, corporaciones e incluso gobiernos extranjeros sin límite o revelación de identidad. Los donantes pueden ejercer una potencial influencia manipuladora sobre el presidente en funciones sin conocimiento del público.

Para lidiar con el problema de los historiadores que escriben recuentos nada halagadores usando los archivos de una biblioteca, Bush expidió la Orden Ejecutiva 13233 en 2001. La Ley Presidencial de Archivos faculta a los presidentes y a sus representantes, e incluso a sus descendientes mucho después de la muerte del presidente, para controlar el acceso a los archivos de las bibliotecas presidenciales.

Aunque hasta el momento sólo se ha bloqueado la liberación de un pequeño número de archivos, existe el potencial para el abuso de poder. La ley es contraria a la letra y espíritu de las leyes que regían previamente a las bibliotecas presidenciales, por ello es importante que el Congreso apruebe leyes para revocarla.

El problema con las bibliotecas presidenciales es la tensión que frecuentemente existe ente lo que quiere el presidente —monumentos blanqueados que procuran engrandecer su reputación a través de la propaganda— y lo que los historiadores y el público requieren —archivos accesibles y buenos museos de historia—. El caricaturista del *Tribune* ilustró brillantemente esto en 1938, pero el problema ha crecido. No puedo imaginar cómo podría ilustrarse este cambio hoy, pero me gustaría ver esa caricatura porque me gustaría reírme del muy serio problema de cómo nuestros presidentes se conmemoran a sí mismos.

*La Ley Presidencial de Archivos faculta a los presidentes y a sus representantes, e incluso a sus descendientes mucho después de la muerte del presidente, para controlar el acceso a los archivos de las bibliotecas presidenciales.*